

Tras toma de L. de Aplicación, suspenden clases y piden desalojo: Senadores se dividen ante idea de alcalde Bellolio de limitar llegada de alumnos expulsados a establecimientos emblemáticos

Mientras un grupo de parlamentarios apoya el planteamiento, otros creen que se debe crear una instancia de acompañamiento para los jóvenes en situaciones complejas. También hay congresistas que rechazan el plan.

VÍCTOR FUENTES Y MACARENA CERDA

En medio de la discusión del proyecto Escuelas Protegidas, que inició ayer su segundo trámite constitucional en la comisión de Educación del Senado, se produjo la toma del Liceo de Aplicación de Santiago.

El Servicio Local de Santiago Centro sostuvo que 200 alumnos participaron en la medida de fuerza, lo que obligó a suspender las actividades académicas y administrativas. De igual manera, comunicó que, ante la negativa de los jóvenes de deponer la ocupación, se solicitó el desalojo.

Este es uno de los varios hechos violentos que han ocurrido las últimas semanas. El anterior ocurrió el martes en el Liceo Alessandri Palma de Providencia, donde un joven vestido de overol blanco —y previamente expulsado de los liceos Lastarria y de Aplicación— encendió una bengala en el establecimiento, y portaba en su mochila 19 botellas con mechas para fabricar bombas molotov.

Debido a eso, el alcalde Jaime Bellolio (UDI) solicitó que los senadores consideraran, en el proyecto de Escuelas Protegidas, limitar la llegada a liceos emblemáticos de alumnos expulsados por hechos de violencia. Y los parlamentarios ya empezaron a fijar sus posiciones.

“Hay que crear una instancia de acompañamiento, porque no sacamos nada con derivar el problema a otro establecimiento”.

GUSTAVO SANHUEZA (UDI)
 PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SENADO

Posibilidades y acompañamiento

El senador Rojo Edwards (P. Republicano), integrante de la comisión de Educación, sostiene que ingresará indicaciones en la línea de lo planteado por el edil de Providencia: “Debemos avanzar en hacerles la vida difícil a quienes utilizan la violencia (...). ¿Por qué apoyar con recursos del Estado a violentos, o quitarles posibilidades a buenos estudiantes por acomodar a violentos?”, indicó.

En tanto, Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión *ad hoc*, propone “crear una instancia de acompañamiento, porque no sacamos nada con derivar el problema a otro establecimiento. Creo que se tiene que crear un instrumento que obligue a que exista

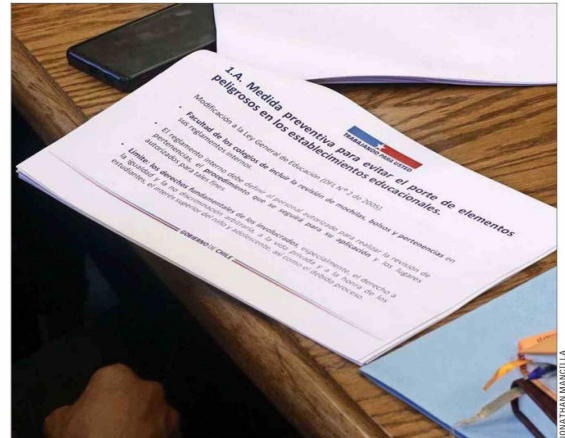
“Es una propuesta excluyente y hasta vejatoria para las familias de aquellos niños y jóvenes que les toque vivir la situación de ser expulsados”.

GASTÓN SAAVEDRA
 SENADOR PS

un proceso de transición, porque algo gatilla que ese estudiante esté en esa situación. Está en una etapa de la vida que es moldeable. Creo que debe existir un acompañamiento desde el Estado, con la familia, para poder reinsertarlo en otro establecimiento”.

En la misma línea, Iván Flores (DC) argumenta que, “más allá de cerrarle todas las puertas a un estudiante que ha sido expulsado por alguna razón desde un establecimiento escolar, y negarle la entrada a los colegios emblemáticos, hay que considerar que ese joven, de seguro, tiene algún tipo de problema que necesita acompañamiento. Y ese se lo puede dar tanto la familia o su ámbito educacional para ver qué pasó”, resalta.

“De otra manera, un joven expulsado pierde su futuro y sus oportunidades



“ESCUELAS PROTEGIDAS”.— Tras su despacho desde la Cámara de Diputados, ayer comenzó la discusión del proyecto, en segundo trámite, en la comisión de Educación del Senado.

producto de un error que cometió. Eso tiene que ser conducido y bien acompañado. Este es un problema bastante más complejo y no tan simple como lo plantea el alcalde”, añade Flores.

La también legisladora María José Gatica (RN) considera que “toda normativa que genere un ambiente de orden es positiva”, y plantea que “la iniciativa del alcalde Bellolio es interesante. Debemos volver a la cultura en la que el profesor es respetado y que la disciplina tiene consecuencias. Hoy los establecimientos educativos están llenos de protocolos que a la larga no funcionan”, y adelanta que conversará con el jefe comunal para ver “la factibilidad de su propuesta”.

Miguel Becker (RN) también se mostró de acuerdo con la propuesta del alcalde, y que “alumnos reincidentes, que han sido expulsados de todos los establecimientos educacionales, no continúan en el sistema si no quieren estudiar y solo quieren hacerles daño a los establecimientos, a sus compañeros, a sí mismos y a sus padres”.

Por otro lado, Gastón Saavedra (PS) sostiene que “es una propuesta excluyente y hasta vejatoria para las

familias de aquellos niños y jóvenes que les toque vivir la situación de ser expulsados”.

Criticán falta de recursos

En tanto, junto a Vlado Mirosevic (P. Liberal) y Esteban Velásquez (ind.), la senadora Yasna Provoste (DC) cuestiona que la iniciativa Escuelas Protegidas no contemple fondos para su implementación: “Para proteger algo, necesitamos colocar recursos, y por lo tanto, el que este proyecto venga con cero recursos, significa que no hay ninguna disposición de apoyar a las comunidades educativas que lo están pasando mal”, critica.

Así, dice que la iniciativa del Ejecutivo “responde solo con la lógica, en mi opinión, equivocada en el diagnóstico, respecto eminentemente del control y la vigilancia policial”.

En tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destaca que “lo que este proyecto busca es entregar nuevas facultades para tratar, primero, de disuadir; y, segundo, de subir las barreras para que ese tipo de hechos ocurran. Estamos haciendo una propuesta que podemos perfeccionar con ese propósito”.